



Romper el ciclo: invertir en una recuperación económica inclusiva

Declaración de la Agrupación Global Unions ante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, octubre de 2022

Lo que hace falta: una vía para salir de la crisis actual

En el momento de celebrar las Reuniones Anuales de 2022 del FMI y el Banco Mundial, todos los países del mundo se enfrentan a desafíos complejos, interrelacionados y sin precedentes. Es indispensable contar con una política pública audaz, una inversión productiva sólida e instituciones del mercado de trabajo fuertes si esperamos superar la crisis del costo de la vida, recuperarnos de los impactos de la pandemia de COVID-19, cumplir las ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover la prosperidad compartida y la gobernanza democrática a través de un nuevo contrato social. Es imperativo que el FMI y el Banco Mundial estén a la altura de las necesidades de este momento y allanen el camino. Abrir la vía significa:

- **Apoyar el pleno empleo, los salarios justos, el trabajo decente y la protección social universal**

El desarrollo económico sostenido e inclusivo requiere asumir una parte justa para el trabajo. Es fundamental abordar la disminución de la participación del ingreso laboral en el PIB y combatir la pobreza laboral mediante la expansión del trabajo decente. Para ello es preciso garantizar salarios mínimos vitales adecuados que tengan en cuenta el costo de la vida. Dado que el trabajo decente requiere de un diálogo social coherente e instituciones del mercado de trabajo fuertes, su promoción exige una aplicación vigilante de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a un entorno de trabajo seguro y saludable y a la igualdad salarial.

Es de esencial importancia que el Banco Mundial y el FMI apoyen la protección social universal, en consonancia con las normas internacionales del trabajo, para luchar contra la desigualdad, fomentar la estabilidad social y ayudar a los trabajadores a capear las emergencias y hacer frente a las crisis sanitaria, económica y climática. Es necesario reforzar el apoyo financiero internacional a la protección social para ayudar a los países de bajos ingresos a resolver los déficits de financiación a corto plazo y crear sistemas de protección social resilientes. Asimismo, a la luz del reconocimiento por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo de este mes de junio de que el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental en el trabajo, las instituciones financieras internacionales deben promover la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales de salud y seguridad en el trabajo (SST) en sus estrategias de inversión, especialmente en consulta con los representantes sindicales.

- **Inversión en puestos de trabajo y servicios públicos**

La pandemia del COVID-19 y la crisis climática demuestran claramente los riesgos que la falta de inversión, la privatización y la financiarización suponen para servicios públicos como la educación, la sanidad, la producción de energía, el agua y saneamiento y el transporte. Las mujeres y los miembros de los grupos marginados se han visto desproporcionadamente afectados por la pérdida de empleos en la economía informal y el trabajo de cuidados no remunerado. Es hora de poner fin al ciclo de recortes presupuestarios y ventas de activos que dejó a los países de todo el mundo vulnerables a estas alteraciones e invertir en bienes públicos.

Las instituciones financieras internacionales deberían apoyar a los países en el desarrollo de sus políticas industriales y respaldar la inversión pública en sectores clave que favorezcan la creación de puestos de trabajo de calidad con fuertes dividendos sociales, tales como las infraestructuras, los servicios públicos, en particular la educación, la economía de los cuidados y la transición industrial hacia una economía con cero emisiones de carbono.

- **Una solución a la carga insostenible de la deuda**

A medida que un mayor número de países entablan negociaciones de reestructuración de la deuda y más hogares se enfrentan a la insolvencia al tratar de satisfacer sus necesidades básicas, el FMI y el Banco Mundial deben admitir que nuestra crisis de deuda global es estructural y necesita una solución sistémica. La austeridad ha alimentado la espiral de la deuda al reducir el crecimiento económico, agudizar la desigualdad y exponer a las personas y a los países más vulnerables a las recesiones y a las crisis.

Deben ofrecerse a los países deudores el alivio de la deuda, la reestructuración, la renegociación, el apoyo a la liquidez, tales como los derechos especiales de giro, y en algunos casos la condonación de los préstamos para hacer posible una recuperación efectiva y sostenible.

- **Compromiso con una transición justa**

La transición a una economía baja en carbono es urgente y necesaria. Las instituciones financieras internacionales deben apoyar a los Gobiernos y a las empresas a fin de garantizar una transición justa. Este compromiso significa planes nacionales sobre el clima y el empleo desarrollados y negociados con los interlocutores sociales que beneficien a los trabajadores y trabajadoras cuyos puestos de trabajo y medios de vida se ven afectados por el cambio climático, así como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La redistribución de las actividades y las políticas activas del mercado laboral, las oportunidades de inversión y formación en empleos respetuosos con el clima y el apoyo a los ingresos de los trabajadores afectados son fundamentales para lograr una transición a una economía baja en carbono y la justicia económica y social.

El apoyo al desarrollo de alternativas energéticas sostenibles debe ser la base de alternativas asequibles para los consumidores a la hora de calentar o climatizar sus hogares, desplazarse o realizar su trabajo.

Una crisis histórica con raíces profundas

Los trabajadores y las trabajadoras de casi todos los países se enfrentan a una crisis del costo de la vida que amenaza su acceso a los alimentos, el combustible, la vivienda y otras necesidades básicas. Aun cuando esta crisis se ve agravada por los efectos de la pandemia del COVID-19, el cambio climático y la guerra, en particular la invasión rusa de Ucrania, tiene sus raíces en tendencias económicas a largo plazo

que han comprimido los salarios, aumentado la deuda y socavado la inversión productiva. En su calidad de piedras angulares de nuestro sistema financiero mundial, es urgente que el FMI y el Banco Mundial trabajen para invertir estas tendencias y satisfacer las necesidades de nuestro momento.

No podemos afrontar nuestros desafíos económicos sin impulsar directamente el empleo y los ingresos de los trabajadores. La contribución del trabajo al PIB mundial ha aumentado desde la gran crisis financiera, pero los trabajadores tienen dificultades porque sus ingresos no han seguido el mismo ritmo. Los salarios mínimos vitales, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la legislación laboral y la protección social son herramientas vitales para compartir la prosperidad, pero han sido atacados y socavados durante décadas, limitando el poder de los trabajadores y la fuerza de los sindicatos. En un momento de necesidad social sin precedentes en materia de sanidad, vivienda e infraestructuras, muchos trabajadores del mundo entero se enfrentan al desempleo, al subempleo o al trabajo improductivo. Un sistema financiero que incentiva las inversiones financieras en la especulación o la recompra de acciones en lugar de hacerlo en la inversión en capacidad productiva ha creado una economía mundial frágil y volátil. Al mismo tiempo, la consolidación ha aumentado el poder de las empresas para fijar los salarios y los precios. Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo pagan el precio.

A medida que los salarios se estancan, la deuda se dispara sin control. La deuda de los hogares se ha disparado debido a que los bajos salarios y la escasa inversión en servicios sociales han puesto a las familias en dificultades para pagar la vivienda, la sanidad, la educación y las necesidades básicas. La crisis de la deuda no solo afecta a los presupuestos de los hogares: los países de renta baja y media se enfrentan a una avalancha de deuda soberana denominada en monedas que no pueden controlar. El sector financiero obtiene enormes beneficios a costa del bienestar de las personas y de la estabilidad mundial. Sin una solución sistémica, no podremos afrontar los retos de recuperación y reconstrucción que nos esperan.

Tanto la pandemia de COVID-19 como el cambio climático se consideran externos a nuestro sistema financiero, pero la crisis mundial que han provocado tiene sus raíces en políticas económicas fundamentalmente erróneas. Tras décadas de recortes prescritos por los economistas ortodoxos, la falta de inversión sistemática ha atrofiado los sistemas sanitarios mundiales, los sistemas educativos, las cadenas de suministro, los mercados de trabajo y la protección social en casi todos los países del mundo. A pesar de las advertencias de los sindicatos y de las organizaciones de la sociedad civil sobre los riesgos que entraña combinar la desinversión con la especulación financiera, la economía mundial se encuentra en una encrucijada. Las subidas de los tipos de interés, una herramienta que los Gobiernos, los bancos centrales y las instituciones financieras han adoptado para hacer frente a la crisis actual, no hacen más que exacerbar el ciclo de bajos salarios, la falta de inversión y la deuda, y no hacen nada para abordar los principales factores de la inflación, tales como el aumento de los precios de la energía, los cuellos de botella en la producción y los márgenes de beneficio de las empresas. Mientras que los países más ricos recurren a los controles de precios, a la política industrial, la financiación de la deuda y los programas sociales universales para aliviar la carga de estas crisis para sus ciudadanos, a la mayoría de los países se les niegan estas herramientas políticas.

Los trabajadores de todo el mundo se han enfrentado durante décadas a la amarga realidad del estancamiento de los ingresos, el aumento de la deuda y la subinversión sistémica. No obstante, dada la gravedad de las profundas crisis actuales, la continuación de estas políticas fallidas amenaza nuestra paz

y nuestros sistemas democráticos. Los trabajadores necesitan salarios fuertes, instituciones del mercado laboral eficaces y protecciones sociales sólidas para participar en la economía global. Los hogares, las industrias y los países necesitan una vía de salida para la carga imposible de la deuda. Las inversiones en un nuevo contrato social, en particular mejores normas de salud y seguridad en el trabajo, son necesarias para recuperarse de la pandemia de COVID-19, abordar los cuellos de botella de la producción y prepararse para un futuro justo y sostenible.

Recomendaciones para las instituciones financieras internacionales

Trabajar con los Gobiernos y los sindicatos para apoyar una agenda de inversiones sólidas que satisfagan las necesidades sociales, impulsen la creación de empleo y construyan un futuro sostenible y equitativo. Estas inversiones deben garantizar la protección de los derechos laborales y de los derechos humanos y apoyar la expansión de la negociación colectiva como medio para mejorar la calidad del empleo, garantizar la salud y la seguridad y distribuir de forma justa las ganancias y las pérdidas en tiempos de incertidumbre.

Apoyar una fuerte inversión en sanidad para recuperarse de la pandemia de COVID-19 y prepararse para futuras crisis de salud pública.

Promover la mejora de las normas de salud y seguridad en el trabajo mediante la ratificación y aplicación de los principales Convenios de la OIT en materia de salud y seguridad y la inclusión de sus principales requisitos en las políticas y estrategias de inversión de las instituciones financieras internacionales.

Garantizar el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras afectados por cualquier proyecto de transición verde, incorporando un diálogo social coherente en la planificación y ejecución del proyecto.

Los sindicatos recomiendan al FMI lo siguiente:

Promover una recuperación sostenible desalentando la especulación financiera de riesgo y reforzando la regulación macroprudencial, la inversión productiva y las políticas de generación de ingresos.

Ayudar a los Gobiernos y a los bancos centrales de todo el mundo a coordinarse para evitar un endurecimiento excesivo de la política monetaria y fiscal que podría desencadenar una recesión mundial en lugar de estabilizar los precios.

Apoyar un mecanismo integral, justo y vinculante para reestructurar la deuda soberana de acuerdo con la Resolución A/RES/69/319 de la ONU y considerar la necesidad de inversiones sociales y sobre el clima en los análisis de la deuda.

Poner fin a los recargos regresivos que endeudan aún más a los países con problemas económicos y obstaculizan la recuperación mundial.

Ayudar a la reasignación de los derechos especiales de giro (DEG) de los países de renta alta a los países en desarrollo a través de fondos fiduciarios específicos, transferencias directas u otras instituciones.

Promover las normas básicas de salud y seguridad en el trabajo para permitir niveles más altos de productividad, reducir la necesidad de gasto en prestaciones de salud y discapacidad y evitar que los trabajadores pierdan ingresos debido a enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo.

Poner fin a las limitaciones de la masa salarial pública que socavan la calidad del empleo y la contratación de trabajadores públicos esenciales, en particular docentes y personal de enfermería, que son indispensables para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Los sindicatos recomiendan al Banco Mundial lo siguiente:

Adoptar un Compás de Protección Social y Empleo que invierta en puestos de trabajo, promueva las normas internacionales del trabajo y apoye las inversiones en protecciones sociales universales que luchen contra la pobreza y promuevan la equidad de manera eficaz.

Desalentar una peligrosa carrera hacia el fondo en las normas mundiales del trabajo dejando a un lado los indicadores laborales y fiscales y de contribución del informe propuesto sobre el entorno más propicio para los negocios.

Garantizar que todos los préstamos procedentes del Grupo del Banco Mundial se ajusten a las normas internacionales del trabajo.

Impedir las prácticas de explotación en los proyectos de desarrollo mejorando la aplicación de las salvaguardias y la gestión de las quejas, en particular plazos firmes para identificar las violaciones de las normas de desempeño, elaborar un plan de acción correctiva en función del tiempo y resolver las violaciones.

Poner fin a la práctica de la aprobación de proyectos por parte del Directorio sin objeciones, especialmente cuando se ha presentado una queja en el Portal de trabajo.

Garantizar que las contribuciones a la financiación de la lucha contra el cambio climático incorporen criterios de transición justa que se ajusten al Acuerdo de París y a la declaración “Apoyando las condiciones para una transición justa internacionalmente” de la COP26.